



REPÚBLICA DE COLOMBIA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
TRIBUNAL PARA LA PAZ
SECCIÓN DE REVISIÓN

Bogotá D.C., 18 de julio de 2022

Radicado Legali:	1500883-90.2022.0.00.0001
Procedimiento:	Garantía de No Extradición
Asunto:	Auto mediante el cual se rechaza de plano la solicitud de aplicación de la garantía de no extradición.
Solicitante:	Arcediano Segura

Auto por el cual se rechaza de plano la solicitud de aplicación de la garantía de no extradición presentada por el señor **Arcediano Segura**.

I. ANTECEDENTES

- Mediante Nota Verbal No. 0075 del 19 de enero de 2021¹, el Gobierno de los Estados Unidos de América, por conducto de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva del señor **Arcediano Segura** para que comparezca a juicio en la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Oriental de Texas por los cargos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas, conforme a la acusación dentro del Caso No. 4:20-cr-254 -también enunciada como Caso No. 4:20-cr-254 (Jordan).
- Atendiendo este requerimiento diplomático, el 20 de enero de 2021 el Fiscal General de la Nación ordenó la captura con fines de extradición del señor **Arcediano Segura**², que se hizo efectiva el 27 de enero siguiente en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Buga, Valle del Cauca³, donde el señor **Segura** estaba privado de la libertad por otras causas.
- Posteriormente, la Embajada de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición mediante Nota Verbal No. 0469 del 24 de marzo de 2021⁴, con sus respectivos anexos debidamente legalizados y traducidos⁵.
- En consecuencia, la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales remitió a la Corte Suprema de Justicia la solicitud de extradición con todos sus anexos para que procediera conforme a sus

¹ Folios 197 a 210 del expediente digital.
² Folios 180 a 182 del expediente digital.
³ Folios 179 y 183 a 191 del expediente digital.
⁴ Folios 207 a 217 del expediente digital.
⁵ Folios 100 a 178 del expediente digital.

competencias legales⁶.

5. Una vez el Alto Tribunal recibió la actuación, mediante auto del 8 de junio de 2021 reconoció personería jurídica al abogado de confianza del señor **Segura** y procedió con el trámite dispuesto en los artículos 500 y siguientes de la Ley 906 de 2004.

6. En el curso de dicha actuación, en el mes de diciembre de 2021, el apoderado de confianza solicitó⁷ a la Corte Suprema de Justicia que suspendiera el trámite de extradición hasta tanto la Jurisdicción Especial para la Paz se pronuncie sobre la aplicabilidad de la garantía de no extradición en favor de su representado, en vista de que esta persona tiene la calidad de miembro de las extintas FARC-EP. Como soporte de su petición, el abogado aportó copia de la Resolución No. 020 de 2017 proferida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz -OACP-.

7. Para resolver esta solicitud, la Corte Suprema de Justicia profirió el auto del 10 de febrero de 2022⁸ requiriendo a la OACP para que informara a esa Corporación si el señor **Arcediano Segura** figuraba dentro del listado de integrantes de las FARC-EP. Así mismo, solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- que informara si el señor **Segura** suscribió acta de sometimiento y de ser así, que se remitiera copia⁹.

8. En respuesta¹⁰, la OACP confirmó la inclusión del señor **Arcediano Segura** en los listados de miembros certificados de las extintas FARC-EP, mediante la Resolución No. 020 de 2017¹¹. Por su parte, la Directora de Asuntos Jurídicos de la JEP informó a la Corte que, aunque el señor **Arcediano Segura** no ha suscrito acta de compromiso, desde el mes de noviembre de 2021 la Sala de Amnistía o Indulto -SAI- requirió información para estudiar la solicitud de beneficios transicionales elevada por el mencionado señor¹².

9. Con esta información, mediante auto AP1802 del 4 de mayo de 2022¹³, proferido dentro del radicado No. 59.402, la Corte Suprema de Justicia accedió a la solicitud de la defensa y ordenó remitir las diligencias a la JEP *“para que adelante el procedimiento tendiente a constatar si existe mérito para activar la competencia de esa jurisdicción y examinar la procedencia de la garantía de no extradición a favor de aquél, de conformidad con el inciso 5º del art. 19 del Acto Legislativo 01 de 2017 y el art. 152 de la Ley 1957 de 2019”*.

10. Una vez recibida la actuación en la JEP, mediante informe secretarial No. 001347 del 17 de mayo de 2022¹⁴, la Secretaría Judicial de la Sección de Revisión asignó el asunto por reparto a un despacho de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz.

⁶ Folios 194 a 196 del expediente digital.

⁷ Folios 226 y 227 del expediente digital.

⁸ Folio 39 del expediente digital.

⁹ Esto, conforme se menciona en los antecedentes del Auto AP-1802 de 2022 proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

¹⁰ Folios 55 a 63 del expediente digital.

¹¹ Folios 55 a 63 del expediente digital.

¹² Esto, conforme se menciona en los antecedentes del Auto AP-1802 de 2022 proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

¹³ Folios 3 al 20 del expediente digital.

¹⁴ Folio 245 del expediente digital.



11. Mediante auto del 24 de mayo de 2022¹⁵, en fase previa a avocar el conocimiento de la solicitud, el despacho sustanciador de la Sección de Revisión dispuso lo siguiente:

PRIMERO: RECONOCER personería jurídica para actuar como abogado de confianza del señor **Arcediano Segura** al abogado Oscar David Sanmiguel López, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.088.245.832 y tarjeta profesional No. 266.835 del Consejo Superior de la Judicatura

SEGUNDO: Por conducto de la Secretaría Judicial de la Sección de Revisión, **SOLICITAR** a la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP que, en el término de tres (3) días, informe a este despacho si el señor **Arcediano Segura** está sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz y de ser así, remita copia del acta de compromiso suscrita por esta persona e informe sobre su cumplimiento frente al régimen de condicionalidad.

TERCERO: Por conducto de la Secretaría Judicial de la Sección de Revisión, **SOLICITAR** a la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP que, en el mismo término de tres (3) días, remita a este despacho copia de los siguientes documentos: i) la respuesta a los requerimientos hechos al señor **Arcediano Segura** en el numeral segundo de la Resolución SAI-AOI-AS-PMA 615 del 23 de noviembre de 2021; ii) la respuesta de la Unidad de Investigación y Acusación al requerimiento hecho por la Sala de Amnistía o Indulto en el numeral tercero de la Resolución SAI-AOI-AS-PMA 615 del 23 de noviembre de 2021; y, iii) la copia de la cartilla biográfica del señor **Arcediano Segura** remitida por el INPEC. (...)

12. En respuesta, la Sala de Amnistía o Indulto informó¹⁶ que, desde el mes de noviembre de 2021, adelanta un trámite en el que estudia la concesión de beneficios en favor del señor **Arcediano Segura**, pero *“no por petición expresa del interesado sino por el listado de personas privadas de la libertad entregado por los señores Rodrigo Granda Escobar, Delegado componente FARC -en tránsito legal a COMUNES- de la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y Jaime Alberto Parra Rodríguez, Responsable PPL Partido COMUNES”*.

13. Asimismo, dentro del estudio del caso, la SAI pudo establecer que el señor **Arcediano Segura** tiene una condena impuesta por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga, Valle del Cauca, por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos y que actualmente se encuentra privado de la libertad en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá.

14. En relación con el sometimiento, expuso lo siguiente:

(...) esta magistratura evidenció que no existen actas de compromiso suscritas por Arcediano Segura, y comoquiera que en el trámite de beneficios no ha sido posible establecer que esta persona cumple los requisitos competenciales de la JEP, o si ha recibido beneficios transicionales, no se ha procedido con la imposición del régimen de condicionalidades, ni se ha aceptado su solicitud de acogimiento hasta el momento. A la fecha esta magistratura ha emitido la Resolución SAI-AOI-AS-PMA-615- 2021 del 23 de noviembre de 2021 con el propósito de ampliar información.

15. Con su respuesta aportó el informe parcial entregado por la UIA¹⁷ frente a la comisión impartida por ese despacho en la que requería identificar, ubicar y obtener copia digital de los

¹⁵ Folios 246 a 252 del expediente digital.

¹⁶ Folios 534 y 535 del expediente digital.

¹⁷ Folios 536 a 551 del expediente digital.

procesos penales que existen contra el señor **Arcediano Segura** y recolectar las copias de los elementos probatorios. Adicionalmente, remitió la respuesta a la solicitud de ampliación de información requerida al señor **Segura** sobre su vinculación con las extintas FARC-EP¹⁸.

16. Posteriormente, el 8 de junio de 2022 el despacho sustanciador de la Sección de Revisión profirió un auto de impulso¹⁹ en el que se resolvió:

PRIMERO: SOLICITAR a la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP que informe a este despacho en el término máximo de cinco (5) días lo siguiente: 1) tiempo estimado para resolver la solicitud de sometimiento y beneficios provisionales del señor Arcediano Segura; 2) si se adelantará alguna actuación relacionada con la verificación de cumplimiento al régimen de condicionalidad del señor Arcediano Segura, teniendo en cuenta la información sobre su presunta incursión en delitos con posterioridad a la firma del Acuerdo Final.

SEGUNDO: SOLICITAR al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga, Valle del Cauca que, en el término máximo de cinco (5) días, remita a la Sección de Revisión copia digital de la sentencia condenatoria proferida contra el señor Arcediano Segura dentro del proceso con radicado 630016099116201800016 por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

TERCERO: SOLICITAR a la Dirección de Fiscalías Seccionales del Valle del Cauca, a la Fiscalía Segunda Seccional de Buga, Unidad de Delitos Dolosos y a la Fiscalía 10 Seccional de Buga que, en el término máximo de cinco (5) días, remitan información sobre el estado de las investigaciones adelantadas contra el señor Arcediano Segura con el CUI 76116000165201900792 por el delito de homicidio y con el CUI 761116000000202000065 por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

17. La Sala de Amnistía o Indulto de la JEP informó²⁰ que no puede asegurar un tiempo específico en el que resolverá el trámite de beneficios solicitados por el señor **Arcediano Segura** comoquiera que no cuenta con los elementos probatorios necesarios para hacerlo y está a la espera de que sean allegados por parte de la UIA; por ello profirió un auto insistiendo en las órdenes expedidas el 1º de junio de 2022 y el 13 de junio siguiente logró comunicación con la Fiscal asignada y con la investigadora del caso para darle prelación a la respuesta. Adicionalmente, el despacho sustanciador de la SAI informó que una vez le sean allegados los elementos probatorios resolverá lo relativo a la competencia de la JEP y sobre la viabilidad del sometimiento del señor **Segura** en un término de 10 días.

18. Además, precisó que, de advertirse la existencia objetiva de procesos penales por hechos posteriores a la firma del Acuerdo Final adelantará el trámite de verificación al cumplimiento del régimen de condicionalidad al que haya lugar. Finalmente, aclaró a la Sección de Revisión que *“hasta el momento esta magistratura no ha aceptado el sometimiento del señor Arcediano Segura, pues en su trámite no se ha podido estudiar el cumplimiento de los requisitos de competencia”*.

19. Por otra parte, la Fiscal 24 EDA de Apoyo a la Fiscalía 2 Seccional de Buga, informó²¹ al despacho lo siguiente: que dicha Seccional tiene asignada la investigación de la noticia criminal No. 761116000165201900792 por hechos que se presentaron el 10 de junio de 2019, en la vereda

¹⁸ Folios 572 a 574 del expediente digital.

¹⁹ Folios 600 a 603 del expediente digital.

²⁰ Folios 614 y 615 del expediente digital.

²¹ Folios 616 a 618 del expediente digital.



Miravalle, municipio de Yocotó, Valle del Cauca, por las conductas de homicidio agravado y fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, en los que resultaron tres víctimas mortales.

20. Que, conforme a la investigación, el responsable de dichos homicidios es el señor **Arcediano Segura**, quien fue vinculado mediante diligencia de formulación de imputación el 8 de junio de 2020 y quien, además, aceptó ser el autor de esos hechos mediante la suscripción de un preacuerdo el 8 de septiembre de 2020. Adicionalmente, la Fiscal informo que por cuenta de esa aceptación se decretó la ruptura de la unidad procesal y el nuevo radicado corresponde al número 76116000000202000065, asignado en la actualidad a la Fiscalía 10 Especializada de Buga. Culminó informando que, el pasado 14 de junio, una investigadora de la JEP llevó a cabo diligencia de inspección judicial a la carpeta del asunto y tomó copia de los elementos materiales probatorios.

21. Por su lado, el Fiscal 10 Especializado de Buga ratificó en su respuesta²² que tiene a su cargo el conocimiento de la actuación con radicado número 76116000000202000065 contra el señor **Arcediano Segura**, en la que se celebró un preacuerdo mediante el cual el prenombrado acepta su responsabilidad en los hechos a cambio de una rebaja del 50% de la pena, por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado en concurso homogéneo y sucesivo y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. Que el escrito de acusación con el preacuerdo fue asignado al Juzgado 02 Especializado de Buga y que está pendiente su verificación y aprobación.

22. Finalmente, el Juzgado 03 Penal del Circuito Especializado de Buga, mediante correo electrónico²³, remitió a la Sección de Revisión copia del acta de audiencia²⁴ y el registro de audio²⁵ de la diligencia en la que se profirió sentencia condenatoria contra el señor **Arcediano Segura** por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado en concurso con el de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerza armadas o explosivos agravado.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Problema Jurídico

23. Corresponde al despacho sustanciador de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz determinar si en el caso del señor **Arcediano Segura** están dados los requisitos mínimos para avocar conocimiento de la solicitud de aplicación de la garantía de no extradición o si, por el contrario, es dable rechazar de plano la petición.

24. Para el efecto, se hará una breve referencia al marco normativo de la garantía de no extradición, los requisitos mínimos que deben acreditarse para que sea factible avocar conocimiento de la actuación, se hará énfasis en el factor personal de competencia, el sometimiento, el régimen de condicionalidad y la reincidencia manifiesta, para finalmente resolver el caso concreto.

²² Folio 624 del expediente digital.

²³ Folio 632 del expediente digital.

²⁴ Folios 635 a 639 del expediente digital.

²⁵ Folio 634 del expediente digital.

2.2. Sobre la garantía de no extradición y los requisitos para avocar conocimiento de la solicitud de aplicación.

25. La garantía de no extradición fue instaurada a raíz del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP y encuentra su regulación en una norma de rango constitucional, concretamente, en el artículo transitorio 19 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, que consagra lo siguiente:

ARTÍCULO TRANSITORIO 19. SOBRE LA EXTRADICIÓN. No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátase de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia.

Dicha garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las FARC-EP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final, **para aquellas personas que se sometan al SIVJRNR.** (Énfasis propio).

Cuando se alegue, respecto de un integrante de las FARC-EP o de una persona acusada de ser integrante de dicha organización, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado.

En el evento de que la conducta hubiere ocurrido con anterioridad a la firma del Acuerdo Final o cuando se trate de una conducta estrechamente vinculada al proceso de dejación de armas y que hubiere tenido lugar antes de concluir este, la remitirán a la Sala de Reconocimiento para lo de su competencia, en este supuesto excluyendo siempre la extradición. En caso de que la ejecución de la conducta haya comenzado con posterioridad a la firma del Acuerdo Final y no esté estrechamente vinculada al proceso de dejación de armas, la remitirá a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición.

Únicamente respecto de conductas cometidas con anterioridad a la firma del acuerdo final, cuando exista una solicitud de extradición respecto de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, de integrantes de las FARC-EP o de una persona acusada o señalada en una solicitud de extradición de ser integrante de dicha organización, este supuesto podrá ser sometido a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz para que decida si la solicitud obedece a hechos o conductas relacionados con la pertenencia, o acusación de pertenencia, a las FARC-EP del familiar del solicitado en extradición. De obedecer a esta causa, por tratarse de un señalamiento o acusación por conductas que nunca antes han sido objeto de solicitudes de extradición ni reúnen las condiciones para ello, la Sección podrá denegar la extradición y en ese caso decidir si el hecho o la conducta es competencia del SIVJRNR o si debe ser investigada o juzgada por la jurisdicción penal ordinaria colombiana. El anterior supuesto deberá ser sometido a la Sección de Revisión por cualquiera de los antiguos integrantes de las FARC-EP que hubieren suscrito el Acuerdo Final de Paz.



La JEP deberá resolver las cuestiones que se le planteen referidas a la extradición en un plazo no superior a 120 días, salvo en casos justificados que dependan de la colaboración de otras instituciones.

26. De la norma constitucional citada se desprende que la garantía alcanza a los integrantes de las FARC-EP que se sometan al Sistema Integral de Justicia, luego no basta la acreditación de la membresía pues el Acto Legislativo es enfático en exigir el sometimiento del solicitante.

27. En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional mediante el auto 401 del 27 de junio de 2018, tuvo ocasión de pronunciarse respecto de la garantía de no extradición y, entre otras cosas, estableció en los siguientes términos cuáles son los criterios de competencia para que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz se pueda pronunciar respecto de la procedencia de la garantía de no extradición (se destaca):

54. Asimismo, resulta preciso aclarar que, para la aplicación de esta prerrogativa exigible por parte de la Sala [sic] de Revisión del Tribunal para la Paz en ejercicio de su competencia, se muestra necesaria la verificación de tres criterios competenciales, a saber: a. *ratione personae* –en razón de la persona-; b. *ratione materiae* –en razón de la materia bajo estudio- y c. *ratione temporis* –en razón de la temporalidad de la ocurrencia de los hechos.

54.1. a. *Ratione Personae*:

El artículo transitorio 19 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, señala que la garantía de no extradición se aplica para todos los integrantes de las FARC-EP y las personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del Acuerdo Final.

Asimismo, el inciso 4 del artículo transitorio 19 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, extendió dicho beneficio para los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, de integrantes de las FARC-EP o que se les acuse de ser parte de dicha organización.

Es menester señalar que **esta garantía solo es aplicable para aquellos integrantes de las FARC-EP que se hayan sometido al SIVJNR**, acreditados por el Alto Comisionado para la Paz, **hayan dejado las armas y firmado las respectivas actas de compromiso**, por lo que no basta con invocar las hipótesis anteriormente señaladas, sino que **se requiere demostrar su compromiso con todo el SIVJNR**.

54.2. b. *Ratione Materiae*:

La razón de la competencia material para que la JEP pueda conocer de un caso en concreto, se relaciona directamente con la comisión de conductas cometidas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. (Art. Transitorio 5º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017).

54.3. c. *Ratione Temporis*:

La regla general sobre la razón temporal de la competencia de la JEP, se relaciona con el supuesto de la valoración que la conducta haya sido cometida con anterioridad al 01 de diciembre de 2016, salvo las excepciones relacionadas con los delitos cometidos con posterioridad a esta fecha que encuentren un vínculo estrecho con el proceso de dejación de

armas o de aquellos de ejecución permanente que no estén referidos en el Libro II, Capítulo V, Título X del Código Penal”²⁶.

28. De lo anterior se desprende que la garantía de no extradición es aplicable a las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos (factor personal de competencia): a) han sido integrantes de las FARC-EP **y se han sometido a la JEP**; b) han sido acusadas de ser integrantes de las FARC-EP **y se han sometido a la JEP** y; c) son familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de un integrante de las FARC-EP o de alguien acusado o señalado de ser integrante de las FARC-EP. En este último supuesto, la solicitud deberá ser presentada por alguno de los antiguos integrantes de las FARC-EP que suscribieron el Acuerdo Final de Paz.

29. Esta es precisamente la postura que ha defendido la Sección de Revisión en su jurisprudencia, en la que ha ratificado que frente al factor personal hace falta verificar tanto la pertenencia a la extinta guerrilla, como el sometimiento al Sistema²⁷.

30. Por otra parte, la Sección de Revisión²⁸ distinguió dos fases en el trámite de la garantía de no extradición: una previa y otra de conocimiento. La fase previa está encaminada a corroborar si con la información allegada es posible acreditar la existencia del trámite de extradición (factor objetivo) y el factor personal de competencia, que son los requisitos mínimos necesarios para activar la competencia del Tribunal.

31. Si este análisis se supera es factible avocar conocimiento y en la siguiente fase acopiar las pruebas que permitan dilucidar la concurrencia de todos los factores necesarios para aplicar o no la garantía.

2.3. Sobre el factor personal, el sometimiento, el régimen de condicionalidad y la deserción manifiesta.

32. Como se explicó líneas atrás, para ser beneficiario de la garantía de no extradición no basta acreditar la pertenencia a las extintas FARC-EP, sino que además es indispensable demostrar el sometimiento al Sistema.

33. El sometimiento de los comparecientes a la JEP implica la disposición personal de aceptar las condiciones del Sistema Integral de Paz y comprometerse con la contribución a los componentes de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta es una exigencia transversal que *“informa todo el sistema de beneficios”*²⁹.

34. La jurisprudencia de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ha establecido que, en principio, *“[l]a forma en que se materializa esa voluntariedad inequívoca de sometimiento a la JEP es con la suscripción de la correspondiente acta de compromiso.”*³⁰

²⁶ Corte Constitucional. Auto A-401 de 2018

²⁷ Tribunal para la Paz. Sección de Revisión. Auto 010 del 31 de enero de 2019.

²⁸ Ver para el efecto los autos SRT-AE-044 de 2018 y SRT-043 de 2019 de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz.

²⁹ JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA-020 de 2018.

³⁰ TP-SA-021 de 2018.



35. Por otra parte, el artículo 5º de la Ley 1922 de 2018 dispone que la persona compareciente es aquella que frente a la cual la JEP asume competencia, lo que significa que, debe existir un pronunciamiento de una autoridad judicial transicional frente al sometimiento.

36. A lo anterior se suma que, de acuerdo con la Corte Constitucional, para acceder al Sistema Integral de Paz es necesario acreditar el cumplimiento de las condiciones inherentes al mismo (régimen de condicionalidad). Así lo expuso al revisar la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017:

“(..) este sistema se encuentra blindado por un sistema de condicionalidades entre los distintos componentes, de tal modo que la satisfacción de cada uno de éstos es condición para la realización de los demás, y de tal modo que **el acceso** al régimen especial de justicia está sujeto al cumplimiento de las obligaciones inherentes a los instrumentos de verdad, reparación y no repetición, previa verificación y calificación de la JEP (...)”³¹

37. En la misma sentencia, la Corte Constitucional enuncia las condiciones mínimas que deben cumplir los ex integrantes de las FARC-EP para acceder y mantenerse bajo la égida de esta Jurisdicción. Estas son (se destaca):

(...) La Corte precisa que cada uno de los tratamientos especiales, beneficios, renunciaciones, derechos y garantías previstas en el Acto Legislativo 01 de 2017 está sujeta a la verificación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz de todas las obligaciones derivadas del Acuerdo Final y, en particular, del cumplimiento de las siguientes condicionalidades:

(i) La dejación de armas.

(ii) La obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación a la vida civil de forma integral.

(iii) La obligación de aportar verdad plena en los términos del inciso octavo del artículo transitorio 5º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017.

(iv) **La obligación de garantizar la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos, o delitos de ejecución permanente, después del primero de diciembre de 2016, en particular, las conductas asociadas con cualquier eslabón de la cadena de producción de los cultivos de uso ilícito.**

(v) La obligación de contribuir a la reparación de las víctimas, y en particular, a decir la verdad en relación con los procedimientos y protocolos para inventariar todo tipo de bienes y activos.

(vi) La obligación de entregar los menores de edad, en particular, las obligaciones específicas establecidas en el numeral 3.2.2.5. del Acuerdo Final.³²

38. Teniendo claras estas previsiones, es factible colegir que el incumplimiento al régimen de condicionalidad también impide acceder al sistema transicional de justicia y recibir cualquiera de los beneficios asociados a la finalización de las hostilidades para los combatientes de las extintas FARC-EP.

³¹ Corte Constitucional. Sentencia C-674 del 14 de noviembre de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

³² Corte Constitucional. Sentencia C-674 del 14 de noviembre de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

39. De otra parte, de la obligación de garantizar la no repetición y abstenerse de cometer delitos se deriva la prohibición de reincidir en conductas punibles, la que, dependiendo de su gravedad, puede aparejar diferentes consecuencias que van desde la pérdida de beneficios transicionales hasta la expulsión del Sistema.

40. La reincidencia, como cualquier incumplimiento al régimen de condicionalidad, tiene distintos grados, siendo la más grave la deserción, la que en términos del numeral 2º del artículo 63 de la Ley Estatutaria de la JEP consiste en lo siguiente:

Los desertores, entendidos como aquellos miembros de las organizaciones que suscriban un acuerdo de paz que, habiendo suscrito el referido acuerdo, decidan abandonar el proceso para alzarse nuevamente en armas como rebeldes o quienes entren a formar parte de grupos armados organizados o grupos delictivos organizados. (Subrayado propio)

41. Frente a la deserción, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ha establecido que, de comprobarse, imposibilita el acceso al Sistema y, por tanto, impide que se tramiten las solicitudes de beneficios presentadas por quienes estén incurso en ella, veamos:

No podría ser de otra manera, no solo porque la Constitución directamente proscribe de forma general y expresa “*aplicar instrumentos de justicia transicional [...] a cualquier miembro de un grupo armado que una vez desmovilizado siga delinquiendo*” (AL 1/12, art. 1, parágrafo 2), sino además, porque ya en lo estrictamente aplicable a la JEP, la L 1957/19 contempla esta circunstancia como una causal de pérdida de competencia personal y de reversión y remisión de las actuaciones a la justicia ordinaria (art. 63). El presente modelo judicial está, por tanto, actualmente imposibilitado para tramitar, y con mayor razón para otorgar o mantener, tratamientos especiales a quienes reinciden con flagrancia en la rebeldía. La justicia ordinaria es la única que, a partir de la declaración de la JEP en ese sentido, respecto de todo momento y siempre, sin solución de continuidad, ha de asumir jurisdicción y competencia de manera permanente sobre los hechos punibles que conciernen a dichas personas. Y son las autoridades judiciales que operan en ese foro las que deberán continuar brindando plena garantía a los derechos de las víctimas. ³³(Subrayas fuera de texto).

42. Por esta razón, el órgano de cierre de la Jurisdicción concluyó que, en lo que corresponde al estudio sobre la aplicación de la garantía de no extradición, frente al factor personal, el Tribunal no solo debe analizar si el solicitante es un integrante de las extintas FARC-EP, sino que además debe verificar si se ha presentado una situación que impida asumir la competencia de dicha petición:

Desde un punto de vista técnico formal, en cualquier tramitación de una solicitud de aplicación de la GNE, la JEP debe realizar un juicio de competencia por el factor personal y definir, en primer lugar, si los requeridos en extradición son “*integrantes de las FARC-EP*”, “*personas acusadas de formar parte de dicha organización*” o familiares de estas dentro de los grados de parentesco y las condiciones establecidas en la Constitución (AL 1/17 art trans 19). Sin embargo, para la JEP no siempre puede bastar la acreditación de alguna de estas situaciones en orden a impulsar el procedimiento, o evaluar la adjudicación de la garantía, toda vez que está obligada circunstancialmente, en segundo lugar, a verificar si se ha presentado un supuesto de sustracción de jurisdicción y competencia, pues debe respetar la decisión del legislador estatutario, juzgada válida por la Corte Constitucional, de privar de competencia personal a la JEP para resolver sobre el mérito de beneficios transicionales

³³ Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 289 de 2019.



respecto quienes fueron integrantes de las FARC-EP, pero que ahora se encuentran en una realidad procesalmente relevante de deserción manifiesta (L 1957/19, art. 63, num. 2).³⁴

43. Finalmente, sobre el tema de la deserción, la Sección de Apelación estableció que, cuando es manifiesta, no es necesario adelantar un incidente de incumplimiento al régimen de condicionalidad, sino que debe declararse la falta de competencia de la Jurisdicción y el asunto se debe revertir de inmediato a la Justicia Ordinaria:

Si bien para el desertor de hecho la Corte interpreta que la Constitución y la ley exigen el agotamiento de un incidente de incumplimiento, bajo las reglas procesales estatuidas en la Ley 1922 de 2018 y sus previsiones concordantes y complementarias, no se ve una razón clara para que este también deba surtirte obligadamente en los supuestos de deserción armada manifiesta, que se declaran verificados en un juicio de incompetencia absoluta y pérdida de jurisdicción sobreviniente dentro de cualquier procedimiento de adjudicación de beneficios transicionales. Por el contrario, ya se dijo que la Sala o Sección de la JEP que adelante un trámite de aplicación de tratamientos especiales, como el de GNE, debe tomar en cuenta la deserción manifiesta para reconocer esa realidad y declarar su incompetencia y falta de jurisdicción sobrevinientes, y abstenerse de continuar con las actuaciones. Si esto es así, el deber de abrir o continuar con un incidente para llegar a la misma conclusión resultaría, por regla general, irrazonablemente inocuo, por lo redundante. Y si en dicho incidente se puede tomar una determinación diferente, el resultado podría crear aporías, contradicciones o tensiones contraproducentes para los fines de la transición, dentro de los cuales se encuentra la seguridad jurídica (C.P. arts 1 y 2, AL 1/17, art. 5).

2.4. Sobre el caso concreto

44. Como se dijo en precedencia, el objetivo de la fase previa en los trámites de la garantía de no extradición es establecer si están dados los requisitos mínimos de competencia para avocar conocimiento de la solicitud. Estos mínimos se refieren a la acreditación del factor objetivo (existencia de un trámite de extradición) y del factor personal.

45. Frente al factor objetivo, desde el auto del 8 de junio de 2022, se estableció que está cabalmente acreditada la existencia de un trámite de extradición en contra del señor **Arcediano Segura**. En el expediente obran las notas verbales No. 0075 del 19 de enero de 2021 y No. 0469 del 24 de marzo de 2021, con las que el Gobierno de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional y la extradición del señor **Segura** para que compareciera a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Texas, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, conforme a la acusación dentro del Caso No. 4:20-cr-254 -también enunciada como Caso No. 4:20-cr-254 (Jordan).

46. Así mismo, está acreditado que el Fiscal General de la Nación profirió la orden de captura con fines de extradición el 20 de enero de 2021, que fue notificada al señor **Segura** el 27 de enero siguiente en el sitio de reclusión donde se encontraba privado de la libertad para ese entonces, esto es, la Cárcel de Mediana Seguridad de Buga, Valle del Cauca.

47. También obra en el expediente la actuación adelantada ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dentro del radicado No. 59.402, autoridad que estaba adelantado el estudio del concepto de extradición que le corresponde, cuyo trámite fue suspendido hasta que la JEP se pronuncie sobre la aplicabilidad de la GNE.

³⁴ Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 289 de 2019.

48. Todos estos documentos son prueba suficiente de la existencia de un trámite de extradición a instancias del Gobierno de los Estados Unidos de América en contra del solicitante.

49. En relación con el factor personal, obra en el expediente el oficio del 22 de enero de 2022³⁵, mediante el cual la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, al responder un requerimiento de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular, informó que esa autoridad “ACEPTÓ mediante Resolución No. 020 del 18 de agosto de 2017 al señor ARCEDIANO SEGURA identificado con cédula de ciudadanía No. 98.367.739, como miembro integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo- (FARC-EP), en virtud de los listados recibidos y aceptados de buena fe y bajo el principio de confianza legítima”. Adicionalmente, se cuenta con copia de la Resolución No. 020 de 2017³⁶, en la que se incluye al señor **Segura** dentro de las personas acreditadas como miembros de la otrora organización armada.

50. De lo anterior se extrae que el señor **Arcediano Segura** está acreditado como miembro de las extintas FARC-EP. Sin embargo, como se vio en acápites precedentes, tal acreditación es insuficiente pues debe obrar prueba de que el solicitante está sometido a la JEP.

51. Al respecto, a la fecha el señor **Arcediano Segura** no ha suscrito acta de sometimiento. Así lo informó la Directora de Asuntos Jurídicos de la JEP a la Corte Suprema de Justicia cuando fue requerida al respecto y lo ratificó la Sala de Amnistía o Indulto en la respuesta al auto del 24 de mayo de 2022 proferido por este despacho, cuando informó: “(...) esta magistratura evidenció que no existen actas de compromiso suscritas por Arcediano Segura”.

52. Asimismo, ninguna autoridad de la JEP ha determinado que frente al señor **Arcediano Segura** se verifican los factores de competencia necesarios para aceptar su sometimiento a la JEP, es decir, tampoco existe el pronunciamiento judicial necesario para acreditar este requisito. En las dos respuestas suministradas por la SAI frente a las solicitudes que sobre el tema le hizo la Sección de Revisión fue enfática en informar que la magistratura “no ha aceptado el sometimiento del señor **Arcediano Segura**, pues en su trámite no se ha podido estudiar el cumplimiento de los requisitos de competencia”.

53. La falta de acreditación del sometimiento del solicitante bastaría para rechazar de plano la petición por la ausencia del factor personal. Pero a todo esto se suma la deserción manifiesta del señor **Segura**, pues existe prueba que acredita que, después de la fecha de suscripción del Acuerdo Final entró a formar parte de un grupo delictivo organizado y en esa condición fue capturado en flagrancia cuando tenía en su poder un arsenal de armas de fuego y municiones tanto convencionales como de uso privativo de las fuerzas armadas.

54. Gracias a los audios suministrados por el Juzgado 3º Penal del Circuito Especializado de Buga a la JEP y el acta de la diligencia, se pudo verificar que el día 14 de junio de 2018 se llevaron a cabo las audiencias de verificación de la legalidad de preacuerdo, individualización de pena y lectura de la sentencia condenatoria proferida contra el señor Arcediano Segura, dentro del proceso con radicado 76116000000202000065, por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado en concurso con el de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado.

³⁵ Folios 55 y 56 del expediente digital.

³⁶ Folios 59 a 63 del expediente digital.



55. De los audios referidos se pudo constatar que los hechos jurídicamente relevantes por los que fue condenado el señor Arcediano Segura son los siguientes:

“Los hechos los sintetizó la Fiscalía Sexta Especializada de Buga en la presentación del preacuerdo de la siguiente manera:

Con fundamento en una información de fuente no formal y las verificaciones sobre las mismas se obtuvieron por parte de la Policía Judicial dirigidas a atacar los grupos y organizaciones delincuenciales del Clan del Golfo, dedicados a la comercialización, fabricación o porte de estupefacientes en el departamento del Valle del Cauca.

La Fiscalía 6ª Especializada de la ciudad de Armenia dispuso orden de allanamiento y registro al predio finca El Edén, ubicado en la vereda La Unión del municipio de Alcalá, Valle, que tenía por objeto la ubicación de sustancia estupefaciente que según la información en su interior se venía almacenando para su distribución. Así mismo, armas de fuego que al parecer eran utilizadas por integrantes de la estructura criminal y a su vez buscaba lograr la materialización de una orden de captura de una persona que al parecer era requerida para su extradición a los Estados Unidos.

En cumplimiento de ello, el día 14 de marzo de 2018, sobre las 16:00 horas, personal de Policía Judicial del CTI, con el poyo del Ejército Nacional, realizó el ingreso a dicho predio en donde fueron atendidos por el señor Arcediano Segura, administrador y responsable del inmueble, a quien le enteraron de la diligencia a realizar.

En el registro personal que se le hizo a este ciudadano al interior del bolso que portaba se halló en poder de una pistola marca Jericó FLS, serial 363129957 con un cartucho calibre 9mm en la recámara y otros 6 cartuchos en su proveedor, de lo cual no aportó el correspondiente permiso para su porte, siendo incautada, al igual que el equipo de comunicación que portaba y la suma de 11 millones de pesos en efectivo.

Se destaca por parte de la policía judicial que el predio consta de una casa de habitación principal y dos construcciones aledañas y que en esa propiedad se desarrollaban actividades de agricultura y ganadería.

En el registro adelantado a la casa principal y que se destacó como construcción No. 1 la cual consta de dos plantas. La segunda planta posee cinco habitaciones, se reporta el hallazgo de los siguientes elementos: en la habitación No. 3 se relaciona el hallazgo de numerosa evidencia documental que fue incautada para su sometimiento a estudio y análisis correspondiente. En la habitación No. 2, que se dice era la que venían ocupando los señores Jonatán Ricardo Delgado y Daniel Montenegro Burgos, quienes laboran para el señor Arcedianos Segura, se hallaron una pistola marca Jericó calibre 9mm, sin serie, un porta proveedor y 24 cartuchos calibre 9mm, marcado como evidencia 3, una pistola marca Glock, serie DZH146 con dos proveedores y 19 cartuchos calibre 9mm, evidencia 4; un fusil marca Smith & Wesson Springfield calibre 5.56 con dos proveedores y 53 cartuchos de munición calibre 5.56 evidencia 5; una pistola calibre 22 sin marca en cache de madera en mal estado y un proveedor como evidencia 6; dos proveedores con 54 cartuchos calibre 5.56 mm como evidencia 7; un radio de comunicación marca Kenwood evidencia 8; una pistola marca Jericó 941FSL, serie 45309919 con un proveedor y 9 cartuchos calibre 9mm como evidencia 9; 10 cartuchos calibre 12mm como evidencia 10.

En la habitación o alcoba principal No. 4 se hallaron los siguientes elementos: 43 cartuchos 9mm de fabricación INDUMIL, lote 05IM, 26 cartuchos de fogueo calibre 9mm, 12 cartuchos 9mm del lote 05IM evidencia 11; una carabina marca Walter G22, calibre 22 L con capacidad de carga para 7 cartuchos, con serie WP017631, con tres proveedores, de la cual se aportó

permiso de porte a nombre de Arcediano Segura y una caja de munición con 95 cartuchos calibre 22L evidencia 12; igualmente elementos de telefonía y equipos de computo, al igual que un chaleco blindado como evidencia 13, 14 y 15.

En poder del señor YESID ROSALES, persona que también laboraba para el señor Arcediano Segura, se le halló portando un arma de fuego tipo revolver marca Astra 357 Magnum 7G, serie R197302 y equipos celulares.

En la construcción No. 2 del predio allanado se encontró una casa de habitación de dos plantas, en el primer piso presenta una habitación, salón, comedor, baño y cocina, y, en la segunda planta tres habitaciones, diligencia de registro fue atendida por la señora Lucia Burgos, en desarrollo de la cual se reportaron en la habitación No. 1 del primer piso, que corresponde al dormitorio ocupado por esta dama, se halló al interior del un closet una funda que en su interior contiene las siguientes armas: una pistola marca Jericó 941PL serie 38324138, calibre 9 mm con un proveedor con 15 cartuchos; una pistola Bruni modelo P4 calibre 9mm, color pavonado, serie No. 15-24714 y un proveedor sin cartuchos; una pistola sin marca color pixelado camuflado sin número de serie con un proveedor calibre 7.65mm sin cartuchos; una pistola sin marca pavonada con cinta adhesiva en la empuñadura y proveedor para la misma con 9 cartuchos calibre 9mm; un proveedor oxidado sin munición; un proveedor color negro y en su interior 9 cartuchos calibre 9mm, 13 cartuchos de munición calibre 9mm contenidos en un proveedor verde; un revólver marca Ruger calibre 38 sin número y sin munición; 49 cartuchos calibre 9mm; dos cartuchos calibre 12 multi-proyectil; 6 cartuchos calibre 12 mm y 2 cartuchos calibre 5.56 mm.

En la habitación No. 1 del segundo piso, que venia siendo ocupada por el señor Carlos Andrés Montenegro Burgos, voluntariamente hizo entrega de una pistola Smith & Wesson marca SW40UV, serie PAW7149, con proveedor para 14 cartuchos calibre 40 y 23 cartuchos calibre 40; pistola marca Jericó serie FLS363129957; pistola marca Jericó calibre 9mm sin serie; un proveedor y 24 cartuchos calibre 9mm como evidencia 3 y pistola marca Glock serie PZH146 con dos proveedores y 19 cartuchos calibre 9mm. Igualmente fueron encontrados un fusil marca Smith & Wesson Springfield calibre 5.56 con dos proveedores y 53 cartuchos de municiones calibre 5.56 mm; una pistola calibre 22 sin marca, cache de madera en mal estado y un proveedor; dos proveedores con 54 cartuchos calibre 5.56 mm; un radio de comunicación marca Kenwood; una pistola marca Jericó.

56. Como se ve, el señor **Arcediano Segura** fue encontrado en posesión de un poderoso arsenal de armas, pero además en el inmueble que administraba se halló dinero en efectivo, radios de comunicación, celulares y equipos de cómputo. A su turno, se acreditó que las demás personas capturadas, varias de ellas armadas, trabajaban para él. La diligencia de allanamiento se llevó a cabo gracias a las actividades investigativas de la Policía en el marco de la persecución a las estructuras criminales asociadas al “Clan del Golfo”. De la sola relación fáctica se puede extraer que la reincidencia del señor **Arcediano** no es de cualquier naturaleza, sino que ostenta una notoria gravedad al ser encontrado en flagrancia como la cabeza de un grupo de hombres fuertemente armados.

57. Por estos hechos, el señor **Arcediano Segura** fue condenado como autor de los delitos de fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado por el numeral quinto del artículo 365 del Código Penal esa norma, que duplica la pena por obrar en coparticipación criminal y el numeral sexto, cuando el autor pertenezca o haga parte de un **grupo de delincuencia organizado**, conducta ejecutada en concurso con la del artículo 366 del Código Penal, que tipifica el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, conducta también agravada



por las mismas causales: haber obrado en coparticipación criminal y **haber pertenecido a un grupo de delincuencia organizada**.

58. En esa medida, al tratarse de una sentencia debidamente ejecutoriada, la reincidencia del señor **Arcediano Segura** en el delito de porte de armas tanto convencionales como de uso privativo de las Fuerzas Armadas se ha acreditado con plena certeza. Estas conductas punibles ejecutadas en concurso se agravaron por la probada pertenencia del señor **Segura** a un grupo de delincuencia organizado.

59. En virtud de lo anterior, se puede concluir que el señor **Arcediano Segura** tiene la calidad de desertor pues luego de suscripción del Acuerdo Final hizo parte de un grupo delictivo organizado (numeral 2º Art. 63 de la Ley Estatutaria de la JEP) y en virtud de ello fue condenado, entre otras cosas, por haber incurrido en la causal de agravación descrita en el numeral séptimo del artículo 365 del Código Penal, es decir por haber pertenecido o hecho parte de un grupo de delincuencia organizada. De no obrar prueba mas allá de toda duda sobre su pertenencia al grupo delictivo, la Jueza de la causa no hubiera podido dictar condena por la referida causal de agravación, ni el señor **Segura**, debidamente asesorado por un defensor de su confianza, hubiese aceptado de manera pre acordada los cargos imputados. Adicionalmente, la sentencia cobró ejecutoria inmediata pues la defensa no interpuso recursos, es decir, aceptó que se trataba de una decisión ajustada a derecho.

60. Por si fuera poco, la Fiscalía 24 Seccional EDA informó que en contra del solicitante se adelanta otra actuación penal en la que se presentó un escrito de acusación con un preacuerdo que está evaluando el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Buga, por el delito de homicidio agravado en concurso con el de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego. Los hechos que dieron lugar a este proceso ocurrieron el 10 de junio de 2019 en la vereda Miravalle, municipio de Yocotó, Valle del Cauca, en los que resultaron muertos los señores Camilo Tangarife, David Fabián Obando y José Olmedo Torres. Esto significa que la Fiscalía tiene suficientes elementos de juicio para formular acusación contra el señor **Segura** como autor de estos homicidios ocurridos luego de la firma del Acuerdo Final y, en principio, el sindicado ha aceptado cargos en un preacuerdo que está siendo evaluado por la judicatura.

61. Teniendo en cuenta lo anterior y aplicando los precedentes de la Sección de Apelación se debe concluir que la Sección de Revisión no es competente y carece de Jurisdicción para conocer de la solicitud de aplicación de la garantía de no extradición elevada por el señor **Arcediano Segura**, en virtud de que dicho beneficio transicional sólo alcanza a las personas que permanezcan comprometidas con el Acuerdo de Paz, estén sometidas a la JEP y excluye a los desertores manifiestos, como el aquí solicitante.

62. La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ha establecido, asimismo, que en los casos de deserción manifiesta es improcedente adelantar el incidente de incumplimiento al régimen de condicionalidad pues ello conllevaría a “*un desfase y un anacronismo censurable*”³⁷. Ante la evidencia de la notoria deserción, basta con actualizar el examen sobre la competencia y jurisdicción de la JEP para revertir todos los asuntos a la justicia ordinaria. Si esto se aplica a los casos de comparecientes sometidos a la JEP se debe proceder aún con más premura en los asuntos de los solicitantes que ni siquiera reúnen la condición de personas sometidas al Sistema y frente a

³⁷ Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 289 de 2019.

quienes no es menester tomar decisiones como la expulsión o el despojo de beneficios provisionales, como ocurre en el presente caso.

63. En conclusión, siendo que el señor **Arcediano Segura** no está sometido a la JEP y considerando además que su reincidencia manifiesta conlleva a la que Jurisdicción Especial para la Paz quede despojada de competencia para conocer la aplicación de cualquier beneficio transicional en su favor, el despacho sustanciador resolverá rechazar de plano la solicitud de aplicación de la garantía de no extradición solicitada.

64. Frente al rechazo de plano, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz señaló que la decisión puede ser adoptada por el magistrado o magistrada sustanciador del caso³⁸ y que cualquier órgano de la JEP “(...) *está legitimado para rechazar de plano los asuntos que se revelen absoluta y evidentemente por fuera de la jurisdicción o competencia global de la JEP* (...)”³⁹

65. En consecuencia, el despacho rechazará de plano la solicitud y ordenará que la actuación sea devuelta de inmediato a la Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia e informará de esta decisión al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

66. De esta decisión también se informará a la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP para que adopte las medidas a las que haya lugar en el ámbito de sus competencias.

67. Por lo expuesto, el despacho sustanciador de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz,

RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO la solicitud de aplicación de la garantía de no extradición presentada por el señor **Arcediano Segura**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, **ORDENAR** la devolución inmediata de esta actuación a la Corte Suprema de Justicia, para lo de su competencia.

TERCERO: Por conducto de la Secretaría judicial de la Sección de Revisión, **COMUNICAR** esta decisión al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

CUARTO: Por conducto de la Secretaría judicial de la Sección de Revisión, **COMUNICAR** esta decisión a la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP par que adopte las medidas a las que haya lugar en el ámbito de sus competencias.

QUINTO: NOTIFICAR esta decisión al señor **Arcediano Segura**, a su abogado defensor y al Ministerio Público, informando que contra esta proceden los recursos de reposición y apelación.

³⁸ Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 073 del 13 de diciembre de 2018.

³⁹ Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 523 del 11 de marzo de 2020.



SEXTO: REMITIR copia de la presente decisión a la Relatoría de la JEP (Acuerdos AOG No. 009 y AOG No. 015 de 2022).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

[Providencia firmada electrónicamente]
CATERINA HEYCK PUYANA
Magistrada